



[Versión imprimible](#) | [Suscripción gratuita](#) | [Números anteriores](#)

también disponible en [francés](#), [portugués](#) e [inglés](#)

MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES TROPICALES

Boletín Mensual - Número 184 - Noviembre de 2012

NUESTRA OPINIÓN

- **REDD, deforestación y las causas de la deforestación**

COMUNIDADES Y BOSQUES AMENAZADOS POR REDD

- **A las comunidades: alertas sobre REDD**

El WRM elaboró una nueva cartilla titulada "10 alertas sobre REDD para comunidades". Con ella se pretende brindar información sobre el tema resumiendo las experiencias concretas de diversas comunidades con proyectos REDD en todo el mundo, registradas por el WRM.

- **BINGOs en busca de REDDención**

Grandes ONG apoyan proyectos REDD/REDD+ y con ello ayudan a empresas contaminadoras a maquillar de verde su imagen.

- **Indonesia: El proyecto REDD de Kalimantan - poca asociación, muchos problemas**

Artículo basado en una visita de campo y conversaciones con habitantes de cinco de las siete comunidades más afectadas por este proyecto.

- **Economía Verde en Brasil: mujeres relatan los impactos del proyecto REDD de SPVS y de un área protegida de la Fundación Boticário**

Testimonios de mujeres de comunidades afectadas por los impactos de proyectos de carbono y conservación de bosques que hoy forman parte de la llamada economía verde.

- **Defensores de derechos humanos ambientales se oponen a REDD+ en Chiapas y California**

Organizaciones sociales tratan de impedir el avance de un acuerdo REDD entre Chiapas y California, denunciando las posibles consecuencias de aumento de emisiones de carbono en California, por un lado, y concentración de tierras en Chiapas, por el otro.

- **REDD y Pueblos Indígenas en Costa Rica**

Con la implementación de REDD, el gobierno pretende consolidar miles de hectáreas de territorio indígena. Aún cuando en Costa Rica todavía no existe un acuerdo en torno a REDD, el pueblo bribri ya sufre sus impactos.

- **Territorio en disputa: nuevo video sobre la economía verde vs las economías comunitarias del sur de Brasil**

Una historia sobre los pueblos de la Mata Atlántica del sur de Brasil, territorio en el que la economía verde compite con las economías de base comunitaria.

PUEBLOS EN MOVIMIENTO

- **Brasil: El pueblo indígena Mundukuru cancela un proyecto REDD**
- **La Vía Campesina: la agroecología es la piedra angular de la soberanía alimentaria**
- **Advertencia a instituciones financieras: No financien la destrucción de los bosques que realizan APP y otros fabricantes indonesios de celulosa y papel**
- **Brasil: Indígenas bloquean ferrovía de VALE**

RECOMENDADOS

- **Video: “Exposing REDD. The False Climate Solution”**
- **Nuevo boletín: REDD y los servicios ambientales amenazan la vida de los pueblos del bosque de Acre, Brasil**
- **Informe: “Recognising Sacred Natural Sites and Territories in Kenya: An Analysis of how the Kenyan Constitution, National and International Laws can Support the Recognition of Sacred Natural Sites and their Community Governance Systems”**
- **Video: Líderes indígenas Sarayaku llaman a la acción**

[inicio](#)

NUESTRA OPINIÓN

- REDD, deforestación y las causas de la deforestación

Resulta cada vez más evidente que los esfuerzos de los gobiernos, ONGs, instituciones y empresas para que REDD sea la principal estrategia de reducción de la deforestación no está dando buenos resultados en los países con bosques tropicales. La tala continúa a todo vapor impulsada por diferentes "proyectos de desarrollo" como la minería, las plantaciones industriales de palma aceitera, de soja y de otros cultivos, las hidroeléctricas y las infraestructuras para facilitar el desplazamiento de materias primas. Hasta el llamado "manejo forestal sustentable" termina provocando más destrucción.

También aumentan las evidencias de que los proyectos REDD, que se están promoviendo en diversos países con bosques tropicales, están causando muchos problemas a las comunidades locales, como lo muestran varios artículos de este boletín. Esta situación llevó al WRM a escribir, tomando como base esas experiencias, una cartilla para las comunidades, llamada "10 alertas sobre REDD para las comunidades", que también se cita en esta edición. Uno de los principales problemas señalados por las comunidades son las restricciones que sufren en cuanto al uso que hacían tradicionalmente de los bosques y al control de sus territorios.

Cabe recordar que mucho antes que REDD apareciera, hasta los que conocen mínimamente la problemática de los bosques tropicales ya sabían que la mejor forma de combatir la destrucción de los bosques era garantizar, a los pueblos y las

poblaciones que viven en los bosques y que dependen de ellos, los derechos sobre su territorio y sobre el uso de los bosques. Hay suficientes ejemplos en el mundo que comprueban que donde se garantizan estos derechos hay una mejor conservación de los bosques.

Quizás, uno de los pocos aspectos positivos de las recientes negociaciones sobre REDD a nivel de la Convención sobre el Cambio Climático de la ONU - que organiza una nueva ronda este mes en Doha, Qatar - sea el hecho de que se instala nuevamente una discusión sobre las causas de la deforestación. Desde que se empezó a hablar de REDD, una de las cuestiones que más ha perjudicado a los pueblos del bosque es que los países, en sus esfuerzos para estar "prontos para REDD", han insistido en señalar a dichos pueblos como los principales responsables de la deforestación debido a "prácticas" como la agricultura itinerante. Del mismo modo, indigna que los "grandes proyectos de desarrollo" antes citados no reciban el mismo tratamiento, sino que, por el contrario, continúen promoviéndose como acciones importantes para el "desarrollo", pese a la destrucción que causan.

Además, con REDD y los crecientes intentos de comercializar también otros servicios ambientales, las grandes empresas involucradas en la destrucción de bosques tropicales están analizando la oportunidad de "compensar" sus acciones destructivas con proyectos REDD o con otros proyectos destinados a la comercialización de "servicios ambientales".

Aunque REDD llegue a tener sus días contados, a nivel internacional, debido a la falta de financiación, el afán de las grandes empresas por "compensar" sus acciones destructivas con acciones "verdes" - o sea, de justificar lo injustificable - no parece llegar a su fin. Para esas empresas, cada vez más grandes, es de suma importancia dicho tipo de mecanismo en este momento en el que las contradicciones del modelo destructivo de explotación de los recursos naturales comienzan a ser cada vez más explícitas, por ejemplo, en los efectos de los cambios climáticos, de la degradación ambiental y de la deforestación.

Creemos que solo con una gran resistencia y movilización de las comunidades afectadas por los megaproyectos de "desarrollo" junto con el apoyo de la solidaridad nacional e internacional se hace posible garantizar la fuerza suficiente para que los gobiernos adopten medidas efectivas con el fin de disminuir la deforestación, dirigiendo su mirada a quienes están causando realmente la destrucción.

Y aún más, es necesario tomar medidas urgentes contra las causas subyacentes de la deforestación, que incluyan, en especial, el cambio estructural del modelo de producción y consumo completamente insostenible en los países más industrializados. Esto no se logrará con actitudes individuales, sino que se requieren acciones enérgicas de los gobiernos para reducir el poder corporativo y el poder del gran capital, en general, y principalmente, del capital financiero. Además del reconocimiento de los derechos de los pueblos del bosque, éste es un camino indispensable si queremos disminuir realmente la deforestación.

COMUNIDADES Y BOSQUES AMENAZADOS POR REDD

- A las comunidades: alertas sobre REDD

A continuación sigue un resumen del contenido de la nueva publicación de contenido popular elaborada por el WRM. “10 alertas sobre REDD para comunidades” pretende dar información sobre el tema, resumiendo las experiencias concretas de diversas comunidades con proyectos REDD en todo el mundo, registradas por el WRM.

Casi 300 millones de personas en todo el mundo dependen de los bosques tropicales para vivir. Pero las grandes empresas con sus negocios de explotación de madera, petróleo, gas y carbón, de minería, de monocultivos agroindustriales – de árboles o alimentos -, de ganadería industrial, de grandes represas hidroeléctricas, están saqueando y destruyendo los bosques.

En respuesta a la deforestación, los gobiernos han impulsado planes tales como parques naturales o áreas protegidas, que, además de que no han dado resultado, muchas veces han perjudicado aún más a las comunidades que dependen de los bosques pues las han expulsado de sus territorios. ¡A ellas! para quienes la deforestación nunca ha sido una práctica común porque destruir el bosque sería como destruir su propia casa... Cortar algunos árboles para cubrir sus necesidades básicas o realizar agricultura itinerante en áreas que luego dejan regenerar no son en modo alguno las causas de la deforestación.

Los promotores presentan REDD y REDD+ como una solución al cambio climático y a la deforestación. Argumentan que el carbono liberado cuando se quema un árbol es parecido al carbono liberado cuando las empresas queman, por ejemplo, petróleo, que provoca cambios en el clima. Y gracias a REDD podrían seguir quemando petróleo en la medida que “compre” carbono – es decir, el derecho a liberar carbono – a alguien que lo esté ahorrando – por ejemplo, a alguien que asegure que va a mantener intocado el carbono almacenado en los árboles de un bosque.

Pero ésta es una propuesta que viene de fuera e impone restricciones y prohibiciones a las comunidades en sus formas de vida y de uso del bosque: en ocasiones no podrán cortar, ni siquiera un árbol para fabricar una canoa, tampoco cazar, pescar y recolectar frutas, plantas medicinales y alimentos del bosque. Si alguien desobedece debe enfrentarse a la policía o a algún guardia privado del proyecto REDD pudiendo perder su libertad. La comunidad como un todo pierde con eso. Las familias que se sienten más aisladas, sin condiciones de trabajar, comienzan a buscar alternativas fuera de la comunidad, generalmente en las ciudades, se van de la comunidad, y la comunidad se debilita.

Esto implica la pérdida de formas de vida, culturas, y también de soberanía alimentaria, ya que no se pueden cultivar más los alimentos con la práctica tradicional de agricultura itinerante. Se trata de un control del territorio, de aquellas zonas donde el bosque se mantiene en pie, que es donde los promotores de REDD van a buscar el carbono, pero es también donde viven las comunidades, generando así un conflicto con ellas en cuanto a su uso del bosque.

Para ganar su apoyo, los promotores de REDD llegan con promesas de empleo, dinero y proyectos sociales para la comunidad, como compensación de las pérdidas por no poder hacer más uso del bosque.

Muchas veces la comunidad acepta el proyecto REDD pensando que así mejorará su vida. Pero luego se encuentra con varios problemas. Uno de ellos surge cuando algunos integrantes de la comunidad son empleados como guardias forestales, debiendo vigilar que los otros miembros de la comunidad no corten árboles, ni cacen ni pesquen ni cultiven en el bosque - REDD enfrenta unos contra otros. Otro problema puede surgir cuando ofrecen dinero a cambio del cual la comunidad debe crear una nueva organización, con un formato preestablecido, para administrar los recursos – esto puede causar conflictos con la organización tradicional de la comunidad.

Los proyectos REDD no tienen como objetivo el bienestar de toda la comunidad, por eso beneficia a algunos de sus miembros y a otros no, mientras que a otros incluso los perjudica y excluye. El resultado es la división de la comunidad, lo que afecta negativamente su capacidad de organización, algo fundamental para luchar contra los impactos negativos del proyecto y garantizar o retomar el control del territorio.

El objetivo central de los proyectos REDD es “vender” carbono y hacer dinero con el proyecto, no resolver los problemas que son comunes a muchas comunidades, como la falta de reconocimiento de sus derechos sobre el territorio o problemas en los servicios de salud, educación, transporte, comercialización de la producción comunitaria. O sea, la falta de políticas públicas adecuadas. Esto no lo resolverá REDD.

Como tampoco resolverá REDD el problema de la deforestación. Estos proyectos se realizan en una determinada superficie de bosque. Fuera de ese espacio, se puede seguir con las actividades destructivas.

¿Y quiénes financian los proyectos REDD? Además de algunos gobiernos figuran industrias contaminantes que quieren mostrar que “compensan” de alguna forma su contaminación en otro lugar. Pero la “compensación” con la compra de carbono no resuelve el futuro de los bosques ni del cambio climático, porque las materias primas que necesitan esas industrias – minerales, petróleo, carbón, grandes insumos de electricidad de grandes represas hidroeléctricas – vienen muchas veces de áreas de bosque. Las empresas continúan contaminando y deforestando, pero con REDD se “maquillan de verde” argumentando que ponen dinero en proyectos que “reducen” la deforestación.

Otros actores de los proyectos REDD son grandes ONGs, técnicos del Estado, consultores, que se ocupan de la coordinación y las cuestiones “técnicas” del proyecto.

En parte, no es difícil entender qué es REDD. Pero es muy difícil o imposible entender que la contaminación de un lugar pueda ser compensada por una actividad realizada a miles de kilómetros de distancia. Y es más difícil aún de entender que, además, la contaminación dé lugar a nuevos negocios, como la compra y venta de carbono, en el llamado mercado de carbono.

Las comunidades afectadas explican REDD diciendo que hay un problema de

contaminación en un lugar distante de su comunidad y los promotores de REDD intentan resolver ese problema dentro del territorio de la comunidad, o sea, dentro de su “casa”. Por eso sugieren que lo mejor es resolver el problema donde surgió, y no en su territorio, donde les traen aún más problemas. Es claro que una solución lógica y mucho más simple y sensata para los grandes problemas de la contaminación es pararla donde se está realizando.

También se sabe que la mejor forma de cuidar el bosque es garantizar a los pueblos del bosque y demás comunidades que dependen de él sus derechos territoriales y de usufructo y apoyarlos, además de contribuir con sus formas de conservación y manejo del territorio. Y sin duda es preciso enfrentar y prohibir las causas directas de la deforestación, entre ellas la minería, la explotación de petróleo, la construcción de grandes represas, la expansión de monocultivos... También es necesario cambiar el gran consumo de productos y energía de apenas una minoría de la humanidad, sobre todo en Estados Unidos y Europa.

Pero REDD no propone nada de eso, al contrario. Habilita a las empresas a contaminar y a seguir deforestando ... en otro lado.

La buena noticia es que en el mundo entero crece la resistencia contra REDD. Las comunidades se organizan cada vez más para garantizar y reconquistar el control y el uso colectivo de sus territorios. Un paso importante de esa lucha es saber de otras comunidades, de lo que realmente ocurrió con REDD. Es saber que la lucha es de varias comunidades, es saber que uniéndose y organizándose es posible parar esa nueva forma de destrucción.

Resumen de la cartilla “10 alertas sobre REDD para comunidades”, elaborado por WRM, disponible en <http://www.wrm.org.uy/publicaciones/10AlertasREDD-esp.pdf>

[inicio](#)

- BINGOs en busca de REDDención

La amenaza del cambio climático se ha incrementado, así como la inserción de los mercados financieros en todos los campos de la vida, incluido el cambio climático.

Como la presente edición del boletín del WRM intenta mostrar, REDD es una falsa solución, tanto para la deforestación como para el cambio climático, aunque resulta útil para el mercado del carbono, un nuevo mercado financiero, sofisticado y descabellado, que negocia créditos de carbono, generalmente usados por los contaminadores para compensar sus emisiones de carbono. Este año, si bien el volumen de las transacciones disminuyó en un 22% con relación a 2010, el mercado de carbono duplicó su valor, que llegó a 237 millones de dólares. (1)

En la medida que forma parte de la arquitectura financiera global, los principales beneficios de REDD irán a parar a manos de los agentes financieros. No obstante, varias instituciones, grandes ONG, multinacionales y gobiernos promueven REDD como algo muy conveniente para las comunidades, que terminarían obteniendo algún dinero para “compensar” los impactos negativos que soportan. Varios artículos de

este boletín tratan de las implicaciones contraproducentes de REDD.

El marketing de REDD obtuvo cierto éxito porque algunos actores dieron credibilidad a la propuesta. Grandes ONG como The Nature Conservancy, Conservation International, World Wildlife Fund (WWF), Forest Trends y Rainforest Alliance están participando o apoyando muchos proyectos REDD en los países del Sur.

Sus poco ecológicos socios – Alcoa, Arcelor Mittal, Barrick Gold, Grupo BG, BHP Billiton, Fundación BP, Bunge, Cargill, Chevron, Coca-Cola, Grupo De Beers, Giti Tire, Goldman Sachs, JP Morgan Chase & Co, Kimberly-Clark, Kraft Foods, McDonald's, Grupo Medco, Monsanto, MPX Colombia, Newmont Mining Corporation, Northrop Grumman Corporation, Rio Tinto, Shell, The Walt Disney Company, Toyota Motor Corporation, United Airlines, Walmart, Wilmar International – necesitaban con urgencia un toque de “verde”, y lo consiguieron.

En marzo de 2010, la revista estadounidense The Nation publicó un artículo de Johann Hari (2), quien había investigado los nexos financieros entre organizaciones ecologistas y corporaciones hostiles al medio ambiente, sobre todo porque se había descubierto que la importante organización conservacionista The Nature Conservancy (TNC) había establecido desde hacía tiempo una relación muy conveniente con el gigante petrolero BP, con lo cual la compañía había “maquillado de verde” su imagen y TNC había conseguido fondos para sus proyectos.

Hari escribió:

“Las organizaciones ambientalistas solían estar financiadas sobre todo por sus miembros y por simpatizantes acaudalados. Sólo tenían un objetivo: evitar la destrucción ambiental. Sus fondos eran escasos, pero cumplían una función muy importante, ayudando a salvaguardar grandes extensiones y a convertir en leyes reglas estrictas que prohibían la contaminación del aire y del agua. Pero Jay Hair – presidente de la National Wildlife Federation desde 1981 hasta 1995 – no estaba satisfecho, y encontró una nueva fuente de enormes recursos: los peores contaminadores.

Hair descubrió que las grandes compañías petroleras y de gas estaban dispuestas a dar dinero a las organizaciones conservacionistas. Sí, estaban destruyendo muchos lugares intactos del mundo. Sí, a fines de los años 1980 era claro que estaban desestabilizando de manera dramática el clima, la base misma de la vida. Pero para Hair eso no las convertía en enemigas, y dijo que sinceramente querían reparar sus errores y pagar para preservar el medio ambiente. Comenzó entonces a extraerles millones y, a cambio, su organización y otras como The Nature Conservancy (TNC) les otorgaron premios de ‘buena gestión ambiental’.

Empresas como Shell y British Petroleum (BP) quedaron encantadas, dado que vieron esto como un valioso ‘seguro contra la mala reputación’: cada vez que alguien las criticaba por su enorme volumen de emisiones de gases de efecto invernadero, o por estar implicadas en el asesinato de disidentes que pretendían que el dinero del petróleo

fuera a parar a la población local, o por un derrame de petróleo que había causado daños irreparables, mostraban sus relucientes premios al ambientalismo, comprados con donaciones ‘caritativas’, para evitar el riesgo de una reglamentación gubernamental.”

El pragmatismo actual hace que la mayoría de los gobiernos y varias grandes ONG se asocien con el sector privado e incluso con grandes corporaciones que han sido y siguen siendo responsables de la destrucción de los bosques. Así, dichos contaminadores pueden comprar sin problema su redención, participando en proyectos REDD/REDD+.

La mayoría de esos proyectos están relacionados con el mercado del carbono, e implican que se fije un valor económico al carbono y a los bosques.

Conservation International anuncia que está trabajando “para alentar el financiamiento de REDD+ y de iniciativas basadas en el mercado para generar una demanda de compensaciones en base al carbono de los bosques”, y se muestra entusiasta con respecto al comercio del carbono: “El mercado emergente del carbono ofrece una de las mayores oportunidades de los últimos cincuenta años de invertir la destrucción de los bosques tropicales que quedan en el mundo, al acercar a compradores y vendedores de créditos de carbono”. De hecho, las grandes ONG promueven vigorosamente el mercado del carbono para la compensación de emisiones en general y para REDD en particular.

Conservation International está presente en África, donde brinda apoyo técnico y financiero a proyectos REDD en RDC, Guinea Ecuatorial, Madagascar y Liberia. En Asia, está detrás de proyectos de carbono forestal en China, Filipinas e Indonesia, y en América Latina participa en proyectos en Ecuador, Perú, Brasil, Guatemala, México y Colombia.

GRANDES ONG DETRÁS DE PROYECTOS REDD EN ÁFRICA, ASIA Y AMÉRICA LATINA

Conservation International (CI) está presente en África, dando apoyo técnico y financiero a la coordinación de una estrategia nacional sobre REDD así como al desarrollo de dos proyectos piloto REDD en dos reservas naturales (Tayna y Kisimba-Ikobo) en la provincia de North Kivu de la República Democrática del Congo (3). En Guinea Ecuatorial, tiene proyectos piloto en el Parque Nacional de Monte Alén. En Madagascar, trabaja en el Proyecto del Bosque Makira y en el del Corredor de Mantadia, mientras que en Liberia participa en la Red de Áreas Protegidas.

También está validando varios proyectos de carbono forestal en Asia y América Latina: la Iniciativa del Bosque Tengchong en China, la de Sierra Madre en Filipinas, la de la Cuenca del Mamberamo en Indonesia, la del Corredor Chocó-Manabí en Ecuador, la del Bosque de Alto Mayo en Perú, la de la Mata Atlántica y el Proyecto de Muriqui en Brasil, la iniciativa de Conservación de la Reserva de Biosfera Maya en Guatemala, la de la Selva Lacandona en La Cojolita, en México, y la del Corredor de

Conservación de Bogotá en Colombia.

The Nature Conservancy (TNC) participa en el proyecto REDD de Río Bravo en Belize, en el proyecto Noel Kempff en Bolivia, en el proyecto de la Mata Atlántica en Guaraqueçaba, Brasil (ver el artículo de este boletín sobre la economía verde en Brasil), en el proyecto del bosque de Tengchong de la provincia Yunnan, China, y en el proyecto del distrito Berau en Borneo, Indonesia. También participa en proyectos piloto REDD que están en la fase inicial, como el de São Félix do Xingú en Pará, Brasil. TNC es el socio responsable de administrar los recursos provenientes de la venta del carbono capturado en el proyecto de Conservación de la Biodiversidad y Uso Sostenible de Mbaracayú, en Paraguay. También asesora sobre el desarrollo de mecanismos financieros en dos Programas de Servicios Ambientales por Captura de Carbono: el de la Reserva de Biosfera de Sierra de las Minas y el de Deforestación Evitada del Parque Nacional de la Sierra del Lacandón, en Guatemala.

WWF Brasil participa, junto con la UICN, en el Proyecto de Carbono del Estado de Acre – Pago por Servicios Ambientales, en Brasil, y apoya el Proyecto REDD de Madre de Dios, en Perú.

El concepto mismo de conservación es inadecuado. Como dijo Hari, “en esta época de calentamiento global, la vieja noción de conservación – que implica preservar intacta una parcela aislada – no tiene sentido alguno. Si la biosfera se está desmoronando por todas partes, uno no puede cercar una zona de vegetación exuberante para protegerla: de todos modos va a morir.”

Por otra parte, el comercio de carbono no reduce las emisiones. Peor aún, distrae peligrosamente la atención de lo que habría que hacer de inmediato: reducir realmente las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la quema de combustibles fósiles.

Lamentablemente, se dedica mucho dinero y esfuerzo a promover falsas soluciones, tales como proyectos REDD o REDD+ basados en el mercado. Sus promotores no deberían olvidar que cargan con la responsabilidad de esa malversación de tiempo y dinero que agrava las actuales crisis climática, social y de la biodiversidad.

(1) Leveraging the Landscape: State of the Forest Carbon Markets 2012, Ecosystem Marketplace.

(2) <http://www.thenation.com/article/wrong-kind-green#>

(3) “República Democrática del Congo. El proyecto piloto REDD de Conservation International: una producción inédita de Disney”, Belmond Tchoumba, WRM, 2011, http://www.wrm.org.uy/countries/Congo/REDD_DRC_sp.pdf

[inicio](#)

- Indonesia: El proyecto REDD de Kalimantan - poca asociación, muchos problemas

Este artículo está basado en una visita de campo de cuatro días y en conversaciones con los aldeanos de 5 de las 7 comunidades más afectadas por el proyecto. Los aldeanos expresaron quejas sobre los supuestos beneficios del proyecto, y argumentaron que la destrucción de los bosques no se ha detenido dentro de la zona del proyecto REDD, mientras que la expansión de la palma aceitera, de la tala y de las actividades mineras en la zona circundante socava aún más el objetivo de reducir las emisiones debidas a la deforestación.

Introducción

El KFCP (Kalimantan Forests and Climate Partnership) es un proyecto REDD de 4 años que comenzó en 2009, con el objetivo de producir compensaciones de emisiones de carbono reduciendo las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques en una zona de unas 120.000 hectáreas de Kalimantan Central. El proyecto está basado en un acuerdo bilateral entre los gobiernos de Australia e Indonesia. El gobierno australiano lo ha financiado hasta ahora con unos 31 millones de dólares. Se estima que el bosque que deberá ser protegido en la zona del proyecto ocupa el 60-70% de la zona, y que las actividades del proyecto incluyen también la reforestación y la rehabilitación, además de un componente denominado “de subsistencia”.

Las actividades del proyecto afectarán directamente a siete comunidades ubicadas en las márgenes del río Kapuas, o sea unas 2.600 familias. Los habitantes pertenecen principalmente al pueblo indígena Dayak. En lo referente a la organización, cada aldea tiene un jefe nombrado y empleado por el Estado, así como líderes electos por las comunidades en base a criterios religiosos (islámicos, cristianos y tradicionales). Una ONG local llamada YPD trabaja por los derechos comunitarios y defiende los medios de vida de los aldeanos.

El proyecto KFCP es uno más de la serie de intervenciones autoritarias que ha habido en la zona durante las últimas décadas, a partir de la época de Suharto cuando, en los años 1990, dicha zona fue incluida en el llamado mega-proyecto arrocero con el cual el gobierno intentaba contribuir a la autosuficiencia en materia de arroz así como estimular la transmigración hacia la región. Con ese fin, se comenzó a drenar las turberas construyendo un enorme sistema de canales; sin embargo, el resultado fue desastroso porque el arroz no crecía bien. En cambio, el proyecto sí condujo a la tala a gran escala, en provecho del clan Suharto, y favoreció los incendios forestales y la destrucción del bosque.

Posteriormente se implementaron otros proyectos de tipo conservacionista, como el proyecto Bosmawas (Borneo Orangutan Survival Foundation) de protección de los orangutanes y el Proyecto para las Turberas de Kalimantan Central (CKPP). El CKPP pretendía recuperar parte de las turberas y su vegetación, bloqueando los canales del proyecto arrocero. Esta actividad de rehabilitación ha sido retomada por el proyecto KFCP.

El proyecto CKPP era una iniciativa de ONGs internacionales como Wetlands International, WWF y CARE. Esas mismas ONGs participaron luego en el proyecto REDD KFCP, y los miembros de las comunidades mencionan que el personal del KFCP incluye a personas que trabajaban antes en el CKPP.

La “asociación”

Los miembros de las comunidades se quejan de que éstas nunca dieron su consentimiento por intermedio de sus propios líderes. Lo que el KFCP llama “consentimiento” son en realidad acuerdos con los jefes de las aldeas de la zona nombrados por el Estado.

Las propias aldeas recibieron encuestas, cursos de formación sobre el control de incendios y también talleres de “familiarización” sobre REDD. Un aldeano explicó que, después del primer taller, la gente no había entendido de qué se trataba REDD y había pedido una segunda sesión en un lenguaje más sencillo. Tampoco esa vez entendieron. Sin embargo, habían quedado “familiarizados” con el proyecto REDD, principalmente porque se les dijo que iba a traer dinero y trabajo a las comunidades.

El empleo parece ser el principal beneficio que el proyecto ofreció a la comunidad, sobre todo relacionado con actividades de reforestación. Cada familia o participante debe sembrar y plantar entre 400 y 575 árboles. Sin embargo, el pago es muy escaso, unos 100 dólares; se efectúa en paquetes, por ejemplo el 50% al comenzar y el resto al final de las actividades, y a veces se paga con atraso. Además, en la aldea de Sei Ahas la gente agregó que el monto estaba basado en la cantidad de árboles plantados, y que otros gastos, como la instalación de pequeños viveros y el transporte, estaban a cargo de cada participante. La gente realmente pobre no se beneficia con el proyecto, porque lo que les pagan por reforestar no les alcanza para sobrevivir. Además, el trabajo de reforestación requiere mucho tiempo y, por lo tanto, no les queda tiempo suficiente para sus propias actividades de subsistencia. Por otra parte, en la comunidad de Sei Ahas los trabajadores son principalmente mujeres, aparentemente porque el proyecto KFCP incluye un “componente de género”.

Los aldeanos también se quejan de la falta de transparencia y de la desconfianza que les inspira la gestión del proyecto. Para la aldea de Sei Ahas, por ejemplo, habría unos 360.000 dólares para las actividades de reforestación; según un aldeano, esto es mucho más que lo que se paga al total de los aldeanos que participan en el trabajo. Así, los aldeanos se preguntan a dónde va el dinero.

Si bien se presenta como un proyecto de “asociación”, la gente del lugar suele quejarse de que sólo participa como mano de obra. No es su proyecto, y esto explica que no se interesen en las actividades. Un aldeano dijo: “la gente incluso ha plantado arbolitos muertos”, sólo para obtener el pago basado en la cantidad de “árboles plantados”. Otro de ellos, miembro del YPD, no ve beneficios reales, y añade que es difícil para los miembros de la comunidad manifestar sus preocupaciones y lograr que sean tenidas en cuenta: “esto es un proyecto del gobierno y tenemos que seguirlo”.

Según un líder de la aldea de Sei Ahas, el proyecto KFCP les habría asegurado que el carbono almacenado por la reforestación podría ser “vendido” por las comunidades en el futuro. A esto respondieron preguntando por qué no vender el carbono ya contenido en el bosque, pero el representante del KFCP respondió que eso no era posible, porque ese carbono no se podía calcular y por lo tanto no se podía “comprar”.

Los aldeanos también comentan que el KFCP los ayudó a realizar un plano de la aldea pero, también en este caso, un líder se queja de que, a pesar de haber organizado reuniones y permitido que la gente diera su opinión, el proyecto quiso imponer su propio programa diciendo que iba a “mejorar” el plano propuesto por la comunidad. Luego de esto, pidieron al jefe de la aldea que firmara dicho plano “mejorado”. El aldeano que contó esto dijo que, por esa razón, había renunciado a la secretaría de la aldea. Se quejó de que el KFCP nunca presentó el mapa final de la zona del proyecto ni el plano “mejorado”, y de que su programa no está basado en los requerimientos de la comunidad sino sólo en las características ecológicas de la zona.

En resumen, los aldeanos que entrevistamos consideran que si el proyecto realiza reuniones con las comunidades es sobre todo para obtener su firma en la lista de asistencia. Cuentan que, luego de varias reuniones comunes, el KFCP quiso organizar algo diferente y ellos sugirieron una presentación de danzas tradicionales. Sin embargo, el espectáculo organizado por el KFCP no fue tradicional y, sobre todo, no era apropiado para los niños. E incluso para este evento, según ellos, había una lista de asistencia.

¿Menos deforestación?

Los aldeanos comentan que los incendios forestales continúan y que el KFCP no hace nada para evitarlo. Con gente de Mantangai Hulu visitamos un sitio que había sido incendiado por gente de fuera para conseguir un árbol valioso y venderlo en el mercado interno. El fuego se usa para quemar las hierbas y así poder identificar y extraer los árboles valiosos. Si bien algunas personas de la comunidad participan en esto, es poco lo que ganan. Quienes más se benefician son las personas de fuera que controlan el negocio.

Un método tradicional para combatir los incendios forestales

Los Dayak tienen un sistema tradicional de estanques para peces llamado “beje”; dichos estanques se excavan cerca del río Kapuas para tener peces cuando el nivel del río desciende al final de la estación lluviosa. Además de los peces, la ventaja de este sistema tradicional es que provee agua para riego y también ayuda a combatir los incendios forestales. Un aldeano que ahora trabaja para el KFCP dijo que podría ganar más con este sistema que lo que le pagan como empleado del proyecto.

En lo que respecta a la reforestación – que se realiza en áreas de 200-400 ha por comunidad – un líder de la comunidad Sei Ahas, por ejemplo, dijo que sólo el 40% de los arbolitos plantados sobrevivían. En Katundjan se afirma que sólo el 20% de las plantas sobrevivieron en las primeras 25 hectáreas reforestadas. Además, los aldeanos se quejan de que la reforestación consiste en “rehabilitar” zonas de bosque, o sea que se tala los árboles para plantar otros nuevos, y el resultado, a su entender, es que hay más deforestación que reforestación. También falta mantenimiento; cuando los árboles mueren no se los reemplaza, y también los incendios han afectado las

zonas de reforestación. Se menciona que los aldeanos no fueron consultados sobre las especies elegidas, y se afirma que el KFCP está utilizando especies no adecuadas, más aptas para las orillas del río que para las condiciones de la zona de reforestación. Sin embargo, las comunidades no participan en la selección de especies y, además, el KFCP las culpa de la pérdida de los árboles jóvenes.

Los aldeanos también dicen que el KFCP no está impidiendo la expansión de empresas de palma aceitera, como la compañía PT RAS, mencionada en la aldea de Sei Ahas; esa empresa no debería estar funcionando pues perdió su licencia, pero las autoridades no hacen respetar dicha decisión. El caso está ahora en manos del Consejo Forestal Nacional. La expansión de la palma aceitera es un factor importante de deforestación en Kalimantan, y va de la mano con la extracción de madera. Las comunidades se quejan de la inacción del gobierno, que parece no querer tener problemas con esas empresas y estar muy interesado en cambio con el proyecto REDD del KFCP, porque trae dinero al presupuesto estatal. Otro problema que denuncian los aldeanos es la posible superposición de las concesiones de palma aceitera y de la zona del proyecto KFCP.

Resumiendo, ese proyecto REDD va de la mano con la destrucción del bosque dentro y alrededor de la zona que abarca. Según la ONG ambientalista WALHI, la minería y las plantaciones de palma aceitera figuran entre las principales causas de la deforestación en Indonesia. Los líderes locales preguntan por qué el KFCP quiere reforestar sólo 400 ha – de las cuales quizás sólo 150 ha sobrevivan – mientras el bosque sigue siendo destruido a su alrededor. La deforestación es un problema para los pobladores, dado que el 99% de ellos dependen del bosque, como observó un líder de Sei Ahas.

Restricciones y falta de reconocimiento de los derechos territoriales comunitarios

Los aldeanos sufren numerosas restricciones. Desde que comenzó el proyecto KFCP les han bloqueado unos 30 canales pequeños y se les negó acceso a zonas que solían frecuentar. Además, cuando la gente necesita madera tiene que alejarse de la aldea, porque está prohibido cortar árboles en la zona del proyecto KFCP.

El reconocimiento de los derechos sobre la tierra es una reclamación básica y general, y los líderes de Katundjan añadieron que su mayor temor es perder el acceso a sus tierras. Dijeron que el KFCP quiere clasificar sus bosques como “bosques comunitarios”, pero las comunidades Dayak quieren que se les llame “bosques de pueblos indígenas” debido a un decreto firmado por el gobernador de Kalimantan que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a administrar sus bosques. Sin embargo, el KFCP no está de acuerdo y afirma que el gobierno nacional no reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Es por eso que los aldeanos dicen que el KFCP no ha defendido sus derechos de tenencia, a pesar de tratarse de una exigencia básica de las comunidades. La YPD los ayudó a trazar mapas de sus comunidades; los habitantes de Sei Ahas, por ejemplo, mostraron el suyo, donde figura la zona de 26.000 ha que consideran como propia y necesaria para su supervivencia cultura y física.

Las comunidades luchan por sus derechos

Desde hace algunos años las comunidades están batallando para que les reconozcan sus reclamaciones, que ellas llaman su “concepto”. Se trata, en primer lugar, de reconocer sus derechos territoriales, además de obtener ayuda para mejorar sus medios de vida. Una forma habitual de sustento consiste en plantar el árbol de caucho, que les es familiar y que pueden procesar mínimamente dentro de la aldea, lo cual no sucede con la palma aceitera, que está mucho más controlada por las grandes empresas. La cosecha de la palma aceitera debe ser transportada directamente a la planta procesadora, mientras que el caucho se puede almacenar. Para Sei Ahas, el KFCP aprobó un proyecto de 400 plantas de árbol de caucho por familia pero, según dicen los aldeanos, las plantas nunca llegaron. En Katundjan, un líder comunitario dijo que su proyecto de plantación de árboles de caucho fue rechazado pero que el KFCP quería que plantaran palma aceitera. El KFCP le ofreció trabajo, pero él no lo aceptó.

Los integrantes de la comunidad se están poniendo nerviosos, también porque el KFCP los hace responsables de sus problemas. En junio de 2012 hubo un incidente en la aldea de Kalumpan, cuando el KFCP organizó una reunión pero sólo invitó a unas pocas personas. Los aldeanos reaccionaron incendiando la sala de reunión. En Mantangai Hulu sucedió algo parecido. Cuando el KFCP organizó una reunión para hablar de su presupuesto e invitó sólo a un puñado de personas, se presentaron unos 300 aldeanos y el líder de la aldea decidió cancelar la reunión. En respuesta hubo varias ventanas rotas. La policía está investigando pero, en mayo de 2012, el KFCP vació su oficina y se fue de la aldea; desde entonces su presencia en Mantangai Hai no es bienvenida. Un representante de dicha comunidad dijo: “rechazamos el KFCP desde el principio, porque no tiene transparencia”, y “es bueno que se hayan ido, desde entonces no hay más peleas”.

Más recientemente, en agosto de 2012, se envió al gobernador de la Provincia de Kalimantan una carta abierta de protesta que incluía varios de los problemas mencionados, firmada por los líderes de las cinco aldeas directamente afectadas, por la YPD (organización que defiende a las comunidades locales), y también por WALHI. Luego tuvo lugar una reunión de los representantes comunitarios, el gobierno estatal y el KFCP para discutir sobre los problemas planteados en la carta. De allí salió un acuerdo según el cual cada comunidad realizará su propia evaluación del proyecto y sus propuestas sobre lo que debería hacerse, para presentarlas a un grupo de trabajo coordinado por el gobierno, que se encargará de darles seguimiento.

Este intento de resolver los graves problemas que ha causado en las comunidades el proyecto REDD del KFCP aún está en curso; mientras tanto, varios líderes comunitarios lo han considerado como “la última chance” para el proyecto.

Winnie Overbeek, WRM, correo electrónico: winnie@wrm.org.uy

Artículo basado en una visita de campo y en la información contenida en “In the REDD: Australia’s carbon offset project in central Kalimantan”, FOEI (<http://www.foei.org/en/what-we-do/climate-biodiversity-finance/latest-news-1/in-the-redd-australias-carbon-offset-project-in-central-kalimantan>) y en “Controversy surrounding Australia’s Kalimantan Forest and Climate Partnership REDD project deepens”, REDD-Monitor (<http://www.redd-monitor.org/2012/09/11/controversy-surrounding-australias-kalimantan-forest-and-climate-partnership-redd-project>

- Economía Verde en Brasil: mujeres relatan los impactos del proyecto REDD de SPVS y de un área protegida de la Fundación Boticário

La supervivencia de poblaciones tradicionales en la región costera de Paraná viene siendo seriamente amenazada por iniciativas privadas de apropiación de áreas de bosques en la región, para fines diversos. En este artículo nos dedicamos, en particular, a dos: una de comercio de créditos de carbono, en el marco del mecanismo REDD, incentivada por la ONG brasileña Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) (Sociedad de Investigación de Vida Salvaje y Educación Ambiental), y otra de preservación del bosque y la biodiversidad en la llamada "Reserva Natural Salto Morato", de propiedad de la Fundación Boticário.

A fines de los años 1990, la SPVS llegó a la región y, en sociedad con la ONG estadounidense The Nature Conservancy (TNC), comenzó a comprar grandes extensiones a los hacendados. En total, su área abarca actualmente cerca de 18.600 hectáreas en las localidades de Antonino y Guaraqueçaba, y tiene status de Reserva Particular del Patrimonio Natural (RPPN). Se trata de áreas privadas que tienen como objetivo preservar la biodiversidad y en las que se prohíbe la caza, la pesca y cualquier otra actividad extractivista.

La SPVS adquirió dichas extensiones mediante su asociación con TNC, y con fondos de tres empresas estadounidenses, General Motors, American Electric Power y Chevron, que tienen un objetivo primordial y de especial interés: el carbono allí "almacenado". TNC afirma que las empresas inversionistas "destinaron, entre 1999 y 2001, la suma de US\$ 18 millones para la implantación, la ejecución y el mantenimiento de los proyectos brasileños durante 40 años." Ello significa que en 1999, años antes del lanzamiento del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD), ya había comenzado uno de los primeros proyectos de carbono en áreas forestales en el mundo.

La Reserva Natural Salto Morato fue creada por la Fundación Boticário, que pertenece al Grupo Boticário, una empresa brasileña del rubro de productos de belleza. La reserva tiene 2253 hectáreas, e incluye una cascada de unos 100 metros. El área fue comprada en 1994 con el apoyo de la TNC.

La Fundación Boticário se articula con otras ONGs, por ejemplo, con SPVS y TNC en la iniciativa "Observatorio del Clima" en cuya introducción se da gran importancia al llamado mercado de carbono, y se presenta como la iniciativa más 'contundente' para combatir los cambios climáticos.

Persecución

La policía ambiental siempre actuó en la región, pero, según afirman los habitantes de las comunidades vecinas a las áreas de SPVS y de la Fundación Boticário, nunca perseguía a la comunidad, como ha ocurrido después de la llegada de estas

organizaciones.

Las mujeres se ven especialmente afectadas, están más expuestas por ser las responsables de las tareas domésticas y de los niños, mientras los maridos suelen salir a buscar trabajo. Hay numerosos relatos de mujeres sobre la actuación de la Fuerza Verde, la policía ambiental, que irrumpe, armada, en sus casas sin tener la debida autorización judicial.

Una habitante de la localidad de Antonina, vecina de la SPVS, afirma “ellos no llegan aquí conversando, llegan aquí molestando”, y cuenta:

“Acá a mi casa ellos vinieron, yo no estaba, había salido para entregar unas invitaciones (...) entonces subieron a mi casa, mi hija estaba sentada allí desayunando. No golpearon a la puerta, fueron directamente a la ventana. Mi hija se asustó. (...) Cuando volví, ya habían recorrido prácticamente por todo mi huerta, sin pedir permiso (...) No sabía que ya habían entrado a mi casa. Con esos aparatitos [de GPS], a mí no me lo hicieron, se lo hicieron a mi hija (...) le mostraban a ella y decían: “tu padre tiene dos escopetas dentro de la casa, ¿dónde están? Decime dónde están” (...) Me molestaron bastante, querían entrar dentro de mi casa, fue una barbaridad realmente (...) Y yo estaba sola en mi casa. Yo y mis hijos, sin mi marido, él estaba trabajando fuera. (...) nosotros entre seis hombres. Y uno dijo: si no me la das [la escopeta], vamos a agarrar a tu marido. Entonces fui a buscar la escopeta y se la di.”

Escuchamos varios relatos de mujeres sobre cómo sus maridos habían sido detenidos. La habitante antes citada cuenta que, en una ocasión, su marido fue esposado en su casa por la Fuerza Verde, que dijo que ese era su “trabajo”. En otra oportunidad, al cortar un árbol para hacer una canoa, fue detenido durante 11 días. Para salir, tuvo que pagar fianza. Cuando arrestan a los maridos, aumenta aún más la inseguridad y el miedo de las mujeres.

Habitantes de la comunidad de Morato, vecinos de la Fundación Boticário, afirman que la policía siempre está en la comunidad. Una habitante cuenta cómo entraron a la casa de su abuela de 80 años:

“Mi abuela tiene presión alta, y ella se sintió mal. Se puso nerviosa. Tenía carne de cerdo y pollo encima del horno. Entraron con todo sin pedir permiso, nada, revolviendo todo para ver lo que había. Ella estaba en la cocina como siempre. La asustaron. Mi abuela se sintió mal. Pero, si se les dice algo, ¡te meten preso!”

Problemas de salud

La imposibilidad de cultivar con el sistema de barbecho, de cazar y pescar y de practicar la medicina tradicional generó una situación en la que ya no pueden consumir los alimentos básicos, sanos, sin agrotóxicos, a los que tenían acceso con estas actividades. En su lugar, las familias deben comprar la mayoría de los alimentos básicos, muchas veces contaminados con agrotóxicos. Según las mujeres, esos cambios en la base alimenticia explican el surgimiento de nuevos problemas de salud.

Una antigua habitante cuenta que antes "el pueblo vivía más tranquilo". La comunidad producía su propio alimento. Actualmente, la dificultad que enfrentan las familias para producir sus alimentos es la falta de tierra. La habitante agrega "no había las enfermedades que hay ahora, no había. Las enfermedades eran sarampión, tos convulsa, que hubo toda la vida, varicela, paperas. Pero esas enfermedades como diabetes, artritis, artrosis, trombosis, no existía nada de eso, nadie tenía nada."

Contar con dinero para poder comprar alimentos se transforma en una presión adicional para que la gente tenga que salir de las comunidades a buscar trabajo.

Forzados a buscar trabajo afuera y promesas no cumplidas

La persecución provocó una situación en la que las comunidades se sienten 'presas' y 'acorraladas' en sus propias casas, cercadas por una selva que solo pueden admirar, pero a la que no pueden entrar y cuyos beneficios no pueden aprovechar. Cuando se les pregunta si los proyectos conservan la selva, los habitantes responden que, cuando tenían sus cultivos cerca de sus casas, había más caza porque los animales también se alimentaban con los alimentos cultivados. Pero hoy ya no pueden cultivar y los animales se alejaron.

No concuerdan en absoluto con la afirmación de que el uso tradicional que hacían de la selva esté poniendo en riesgo el futuro de la misma. Por ejemplo, en relación a uno de los alimentos más comunes y apreciados por las comunidades - el palmito -, una habitante afirma: "Justo acá, alrededor de mi casa hay mucho palmito, las semillas caen al suelo; a veces las tiramos en la selva, pero después no se puede recoger, nosotros no podemos recogerlos".

Es por ello que muchos habitantes, los hombres, pero también las mujeres, se ven forzados a vender su fuerza de trabajo a los hacendados de la región o a buscar trabajo en las pequeñas ciudades de la región o en la capital.

Asegurarse un sueldo con el trabajo en la SPVS tampoco es una opción relevante para las comunidades. Cuando llegó, la SPVS prometió empleos que durarían alrededor de 40 años, el mismo tiempo de existencia previsto para el proyecto de carbono. Según los habitantes, la SPVS empleó inicialmente a 47 habitantes de la comunidad, en su gran mayoría como guardias forestales, pero hoy quedan pocas personas. Ex empleados cuentan que despidieron a casi todos y que quedan solo siete funcionarios. Además, los sueldos que pagaban eran y son bastante bajos, un poco más de un salario mínimo. Solo tres de los 47 funcionarios iniciales eran mujeres, con sueldos aún más bajos que los de los hombres. El caso de la Fundación Boticário no es muy diferente. Según los habitantes de la comunidad de Morato, sólo habría 6 personas trabajando.

Mientras la clase media de Curitiba, capital del estado, ha comprado casas en la región para pasar sus fines de semana y feriados, varias familias de las comunidades locales han desistido de seguir viviendo allí, lo que llevó al vaciamiento de las comunidades. Sin embargo, también hay casos de familias que volvieron a sus comunidades, debido a la dificultad de adaptarse a la ciudad. Una habitante que vivió un tiempo en la ciudad y que volvió cuenta: "(...) prefiero este lugar, acá es tranquilo. Pero (...) no podemos hacer más nada."

Comunidades resisten y señalan alternativas

Sin embargo, las comunidades siguen resistiendo a la presión de la SPVS y de la Fundación Boticário, que parecen tener el objetivo de expulsarlas del lugar. Una comunidad se organizó de forma especial. Al comienzo de la década pasada, en la localidad de Antonina, un hacendado quería vender sus tierras a la SPVS, lo que hubiera ocasionado la expulsión de todas las familias que allí vivían. Éstas se organizaron y, con el apoyo del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), realizaron una ocupación en 2003. Actualmente hay 20 familias en dicho lugar que luchan por la oficialización del campamento, ubicado en el asentamiento de Rio Pequeno y que lleva el nombre del ambientalista José Lutzenberger, para que sea un asentamiento de la reforma agraria

La comunidad inició pequeños trabajos de reforestación y, optando por la agroecología, eligió la propuesta de trabajar colectivamente con el sistema agroforestal para que se generaran ingresos para las familias en el futuro. Además, cada una de las familias tendrá su parcela individual para su subsistencia básica. Una habitante, mientras trabaja en la recuperación con el sistema agroforestal de una de las áreas degradadas por el hacendado, cuenta:

“Hace cuatro años que vivo acá y me gusta. (...) Trabajo acá, tengo un terreno también, y trabajamos colectivamente. (...) Así todo el mundo ayuda, es muy bueno, es muy agradable (...) En el futuro aquí, más adelante, va a haber un matorral que se va a transformar en agroforestación (...) para poder tener ingresos para mí y para todas las compañeras, creo esto para el futuro (...) Y es lindo, entrar acá, ver los árboles, las plantas. Nosotros no trabajamos pensando solamente en el dinero, nosotros trabajamos pensando en la vida también. Trabajamos con mucho orgullo, con mucho amor. Porque la planta es una vida igual a nosotros, también tiene sed (...) Viví en la ciudad (...) la ciudad es un horror. (...) Acá no, las casas se pueden dejar abiertas. (...) Y para mis hijos, este lugar es un paraíso. (...) Acá no hay nada de violencia.”

La realidad de Paraná también muestra que las comunidades resisten. Y ellas nos ofrecen una serie de elementos para repensar el modelo de desarrollo perverso que la economía verde busca consolidar. Por ejemplo, son las familias las que practican la recuperación de la naturaleza. Muestran que el ser humano forma parte y depende de la naturaleza, y que la naturaleza es una riqueza que hace posible que la gente consiga "vivir bien", conservando y disfrutando una verdadera riqueza.

Resumen del artículo “Economía Verde no Brasil: a privatização da Mata Atlântica: Projetos de REDD e áreas protegidas e seus impactos sobre mulheres e homens em comunidades tradicionais no litoral do Paraná”, de Winfridus Overbeek, publicado en la revista elaborada conjuntamente con Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe y con Grain/ Acción por la Biodiversidad sobre Economía Verde. Se puede acceder a la publicación completa en español en:

http://www.wrm.org.uy/temas/Economia_Verde/asalto_final_a_los_bienes_comunes.pdf

- Defensores de derechos humanos ambientales se oponen a REDD+ en Chiapas y California

Dado que los intentos de negociar un nuevo instrumento para la mitigación del clima en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático quedaron en suspenso hasta 2020, el tema de REDD+ ha salido de la arena mundial para centrarse en acuerdos subnacionales, como los que propone el Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre el Clima y los Bosques (GCF). Uno de los que encabezan el programa del GCF es el acuerdo entre los Estados de California, EE.UU., y Chiapas, México.

Sin embargo, Amigos de la Tierra EE.UU., Otros Mundos (Amigos de la Tierra México), la Red Ambiental Indígena y organizaciones aliadas esperan evitar que se concrete un acuerdo sobre REDD entre Chiapas y California, invocando su potencial de aumentar las emisiones en California y el acaparamiento de tierras en Chiapas.

Cuando, en septiembre, el GCF reunió a funcionarios gubernamentales de seis países en San Cristóbal de las Casas, la antigua capital colonial de Chiapas, no previó quizás que organizaciones indígenas locales y organizaciones de la sociedad civil iban a protestar. Después de todo, el objetivo del GCF no es promover la extracción de petróleo, la bio-prospección, el libre comercio ni ninguna de las demás actividades que siempre han provocado protestas e incluso insurrección declarada en Chiapas, sino promover la conservación de los bosques con el fin de absorber la contaminación climática desenfrenada.

Ahora bien, una de las preocupaciones de las comunidades que se oponen a REDD es, de hecho, que esa distinción no es tan clara como quisieran los promotores de REDD.

Cuando los campesinos indígenas de la selva lacandona oyen decir que recibirán pagos por dejar de cultivar los productos tradicionales para permitir la reforestación con palmas africanas – un programa que el gobernador de Chiapas llama “Reconversión productiva de la agricultura” – ven desarrollarse un modelo familiar. Y cuando se les dice que quizás deban abandonar sus aldeas de la selva para que el bosque pueda recuperarse luego de siglos de degradación (muchas aldeas lacandonas ya han sido reubicadas), oyen el eco de la contra-insurrección económica y del robo de sus tierras que cometen las fuerzas gubernamentales y transnacionales.

Ambos proyectos – la plantación de cultivos para biocombustible y la reubicación de las comunidades del bosque – están asociados a la implementación local de un proyecto que el gobierno estatal de Chiapas llama REDD+, a pesar de que, hasta ahora, este último no tiene criterios formales ni relación financiera con los mercados californianos. Y nadie debería extrañarse de que estallen protestas; en Chiapas, los derechos sobre la tierra, el desarrollo rural y la lucha por la autonomía indígena generan constantes tensiones, y ninguna región del Estado es más conflictiva que la selva lacandona... justamente la zona donde el gobierno de Chiapas intenta implantar lo que llama REDD+.

“Durante 35 años, todo el programa para la selva lacandona fue impuesto por el gobierno”, dijo Florencio Cruz Gómez, un campesino de la aldea de Frontera Corazal,

a los funcionarios de la reunión del GCF. “Nunca hubo un proceso de consulta. Eso nos lleva a preguntar al gobierno, si ustedes abandonaron a su hijo hace 35 años, ¿por qué quieren ahora ocuparse de él? ¿En qué condiciones creen que está, y por qué suponen que no quiere tener nada que ver con ustedes?”

Cruz Gómez formaba parte de la pequeña minoría de campesinos que asistió a la reunión del GCF, y su frustración era evidente. Reconociendo las tensiones existentes, William Boyd, director del GCF, dijo: “Toda política pública extensa va a generar oposición. Lo entendemos, y vemos que deberemos comunicar mejor nuestros objetivos”.

Sin embargo, en el caso de Chiapas la escasez de comunicación parece estar acompañada por objetivos cuestionables.

“Hemos lanzado una verdadera revolución verde en Chiapas”, dijo el gobernador del Estado, Juan Sabines, al plenario del GCF. “En Chiapas, como en muchos lugares del mundo, nuestros bosques han sido objeto de destrucción porque la población rural necesita cultivar. En muchos casos, esa producción ni siquiera llega al mercado porque la gente la usa para su propia alimentación. Es un despropósito.”

“Para resolver ese problema, hemos aprobado una ley sobre el cambio climático. REDD+ es una parte importante del programa. En 2010, hicimos un pacto con los propietarios indígenas de la selva. Ésta estaba ocupada por más de 900 comunidades. Ahora las hemos sacado de allí. Las Reservas están siendo conservadas y protegidas por sus legítimos propietarios, quienes pronto tendrán acceso a los mercados del carbono.”

Entre las comunidades que se prevé “sacar de la selva” figura la aldea de Amador Hernández: 1.500 campesinos mayas tzeltal que han vivido dentro de la Reserva Montes Azules desde mucho antes de que estuviera “protegida”. El primer día de la reunión del GCF, varios campesinos de Amador Hernández entraron en el auditorio y pidieron el micrófono durante unos minutos. El Ministro de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas, Fernando Rosas, rechazó su pedido y les dijo que, si querían considerar la posibilidad de participar en el programa REDD+, con gusto los recibiría otro día.

Insatisfechos con esa respuesta, los campesinos organizaron una protesta. Entregaron volantes a los delegados del GCF, declarando: “¡El gobierno les está mintiendo, no nos informaron ni nos consultaron!” Eufemia Landa Sánchez, de la municipalidad de Marqués de Comillas, una región muy deforestada que limita con la Reserva Montes Azules, tomó la palabra y leyó un largo mensaje.

“Los planes de negocios transnacionales para las zonas rurales de Chiapas tienen ya un rato. Los recursos naturales de biodiversidad y agua, de minerías, de biocombustibles y desde más antes de petróleo, han desalojado a la gente, intoxicado la tierra o convertido al campesino en mozo en su propia tierra. Y siempre nos ponen en delito como causa. El delito de ahora es que somos culpables del calentamiento global.”

“Con el REDD+ los ricos empresarios y sus gobiernos chalanos se agregan un

negocito más, el negocio del carbón en su forma de humo contaminante, y al campesino un miedo más: que las selvas y bosques de Chiapas serán los que lo chupen.”

“¿Por qué no nos consultan?, ¿por qué a las fuerzas quieren imponer sus voluntades de ricos? Las selvas son sagradas y están ahí para el servicio de los pueblos, para el servicio generoso porque así a nosotros también dios nos las entregó; nosotros no vamos a sus países de ustedes a decirles que hacer con sus vidas y sus tierras, respeten las nuestras, váyanse por donde vinieron, comerciantes de la vida.” [La declaración completa figura al final de este artículo.]

El discurso y la protesta simultánea que tenía lugar en la calle impresionaron mucho a los delegados del GCF. Iwan Wibisono, del Grupo de Trabajo sobre REDD+ de Indonesia, comentó: “Creo que la manifestación que hay afuera no sucede sólo en Chiapas, la encontramos también en Indonesia y en otros países. Y es comprensible, porque se trata de problemas muy graves.”

Un mes después de la reunión del GCF en Chiapas, Amigos de la Tierra EE.UU. colaboró con la Red Ambiental Indígena (IEN) y organizaciones aliadas de Chiapas, de Acre (Brasil) y de Ecuador, para hacer llegar esas inquietudes a los legisladores y al público en general de California.

La delegación, que incluía al director del IEN, Tom Goldtooh, a José Carmelio Alberto Nunes (Ninawa), presidente de la Federación Huni Kui de Acre, Brasil, a Berenice Sánchez de la Alianza Global de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales contra REDD y por la Vida, y a Gloria Ushigua de la Asociación de Mujeres Sapara (Ecuador), así como a representantes de organizaciones californianas, de la Red Ambiental Asia-Pacífico, del Centro sobre la Raza, la Pobreza y el Medio Ambiente, de la Alianza Californiana por la Justicia Ambiental y de Greenpeace International, llevó sus inquietudes a la capital de California, donde habló con el Consejo californiano del Aire (encargado de implementar la legislación de California sobre la reducción de emisiones), la Agencia de Protección Ambiental de California, y la oficina del gobernador del Estado (ver el comunicado de prensa de FoE en <http://www.foe.org/news/news-releases/2012-10-californias-global-warming-trading-scheme-could-endanger>).

Junto con la preocupación ante la falta de integridad ecológica del programa REDD proyectado para California, los activistas manifestaron serias inquietudes en cuanto a la seguridad de los delegados, dado que los proyectos de tipo REDD ya están provocando muertes, expulsiones violentas, reubicaciones forzosas, encarcelamientos y prohibiciones de acceso y de uso de tierras indispensables para la supervivencia de pueblos indígenas y comunidades que dependen del bosque (ver el comunicado de FoE en <http://www.foe.org/news/news-releases/2012-10-indigenous-leaders-rejecting-california-redd-hold-go>).

Se supone que el Grupo de Trabajo sobre Compensaciones REDD, un órgano cuasi-gubernamental encargado de redactar los protocolos sobre REDD, publicará de un momento a otro su informe general; el Consejo Californiano del Aire votará en 2013 si los créditos REDD formarán parte de las reducciones de emisiones fijadas por el Estado.

Mensaje completo de Eufemia Landa Sánchez:

Muy buenas a todos y a todas. Somos representantes de las diversas comunidades, regiones y municipios indígenas y campesinos del Estado de Chiapas y nos hemos entrado a esta Cumbre a tomar la palabra por mano propia porque el gobierno no nos quiso darla.

Por la Selva Lacandona estamos presentes comisiones de las comunidades de la zona Amador Hernández, que está en el mero corazón de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, y grupos comunitarios del municipio de Las Margaritas y del municipio de Marqués de Comillas. Por la región Altos de Chiapas también presentes grupos comunitarios de los municipios de San Juan Cancuc, Oxchuc y Chenalho.

Venimos hoy hasta aquí, frente de ustedes, para denunciar los programas y proyectos de despojo de nuestros territorios y recursos que desde hace tiempo los malos gobiernos intentan contra nosotros, ahora con un nuevo pretexto: el cambio climático y su proyecto que llama REDD+.

Los planes de negocios trasnacionales para las zonas rurales de Chiapas tienen ya un rato. Los recursos naturales de biodiversidad y agua, de minerías, de biocombustibles y desde más antes de petróleo, han desalojado a la gente, intoxicado la tierra o convertido al campesino en mozo en su propia tierra. Y siempre nos ponen en delito como causa. El delito de ahora es que somos culpables del calentamiento global.

Que entonces hay que dejar de producir nuestros alimentos y mejor comprar harina de maíz con el dinero que nos paguen por la conservación de los bosques y selvas o con la llamada reconversión productiva que consiste en quitar las milpas para plantar árboles frutales donde las aves y otros animales esos sí que puedan comer abundante para que grande se crezca también la biodiversidad. La biodiversidad de donde van a salir sus negocios patentes de medicinas y alimentos que los gobiernos llaman con un nombre extraño para nosotros: la biogenética.

Con el REDD+ los ricos empresarios y sus gobiernos chalanos se agregan un negocito más, el negocio del carbón en su forma de humo contaminante, y al campesino un miedo más: que las selvas y bosques de Chiapas serán los que lo chupen y la amenaza de que si no conservamos las montañas, no sólo somos responsables de la producción de ese carbón que causa el calentamiento del planeta sino también, así dicen los malos gobiernos para meternos miedo, de la imposibilidad de reducirlo.

No estamos de acuerdo con ese REDD+, ni es cierto que al reforestar los que ahora son nuestros campos de cultivo la contaminación mundial del carbón se va a bajar. Ni hace parte de nuestra cultura ponerle precio a la tierra, ni a sus montañas ni a sus ríos ni a lo que ella así nada más la madre

naturaleza por la generosidad de dios nos entregó a las personas, menos todavía cuando la paga viene para hacernos cómplices del pagador para que él sí pueda seguir contaminando y acabándose al mundo.

En el Montes azules no vamos a permitir el paso de la brecha Lacandona, la medida agraria que por la fuerza los Caribes están intentando pasar por nuestras tierras para que los grandes empresarios, ahora bajo la cobertura del programa REDD+ y el pretexto del cambio climático, obtengan su certidumbre legal para entrarse a aprovechar los recursos naturales que son de todos los mexicanos y que los pueblos indígenas de por sí conocemos y utilizamos. No nos oponemos a la vecindad con los Caribes a quienes el gobierno les entregó hace cuarenta años una tierra que no pidieron ni conocen, pero sí lo que no queremos es que esa tierra, la más biodiversa y con mayores reservas de agua de México, la entreguen, bajo el pretexto del aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y ahora de la mitigación del cambio climático, al control del poderoso extranjero.

Y también queremos con estas palabritas reclamarles que no nos usen, gobernadores mentirosos de gobiernos neoliberales. En su convocatoria a este evento de ustedes, como queriendo dar a entender que hasta los más rebeldes ya están conformes con su proyecto, pusieron una fotografía de campesinos zapatistas protestando en el ejido Amador Hernández, tomada en 1999. Aquí estamos, gobiernos mentirosos; no nos hemos rendido, ni olvidado de qué lado camina la vida honrada de los pobres. ¿Por qué no ponen a los Caribes como imagen de su evento si son ellos los únicos que han aceptado y que siempre aceptan vender una tierra que no era de ellos?, ¿o ya sus patronos de ustedes no les creen que ellos son los únicos pobladores de la Selva y los meros originarios?

En Marqués de Comillas nos tumban las selvas, las selvas originarias, para meter sus palmas africanas que les llaman bosques como les llamó ayer el gobernador de Chiapas Juan Sabines, y cuando ya nos cansamos por el mal precio o porque entramos en reflexión de lo que hicimos y cortamos esa palma, nos llevan a la cárcel porque nos dicen que también estaba comprometida para calmar el cambio climático aunque eso nunca se lo dijeron a los compañeros que la sembraron.

En San Juan Cancuc, dizque para cambiar a energías limpias, quieren imponer con sobornos una represa, y aunque ya [la Comisaría de] los Bienes Comunales les entregaron acta que pide que se vayan, ustedes siguen llevando materiales y sobrevolando con helicóptero el cañón por donde quieren pasarla.

En las Margaritas, como no pueden con las asambleas ejidales, quieren también meter sus proyectos de división de la tierra comunitaria con sus programas de certificación agraria, el FANAR, o Procede como le llamaban antes, para negociar ya con cada persona sin necesidad de pedirles a todos su palabra.

¿Por qué no nos consultan?, ¿por qué a las fuerzas quieren imponer sus

voluntades de ricos? Las selvas son sagradas y están ahí para el servicio de los pueblos, para el servicio generoso porque así a nosotros también dios nos las entregó; nosotros no vamos a sus países de ustedes a decirles qué hacer con sus vidas y sus tierras, respeten las nuestras, váyanse por donde vinieron, comerciantes de la vida.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a 26 de septiembre de 2012

inicio

- REDD y Pueblos Indígenas en Costa Rica

Costa Rica actualmente es reconocida a nivel mundial por el esfuerzo que realiza en la conservación de los bosques. Principalmente se le atribuye este “éxito” al programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA), antecedente del mecanismo REDD en Costa Rica.

El PSA es un sistema de incentivos financieros a cargo del Fondo Nacional para el Financiamiento Forestal (FONAFIFO), una dependencia del Ministerio de Ambiente y Energía. Está orientado a propietarios(as) y poseedores(as) de bosques y plantaciones de árboles a los que se les paga por las funciones que proveen sus bosques o plantaciones, a las que se les denomina “servicios ambientales”, entre los que se reconocen: mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero; protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico; protección de la biodiversidad para su conservación y uso sostenible, científico y farmacéutico, de investigación y mejoramiento genético; la protección de ecosistemas y formas de vida y de la belleza escénica natural para fines turísticos y científicos.

Sin embargo, el sistema presenta serias debilidades al enfocarse solamente en los denominados servicios ambientales, dejando de lado valores culturales, espirituales y sociales del bosque y la biodiversidad, así como los respectivos impactos de estas omisiones en comunidades locales y pueblos indígenas. Tampoco cuestiona las causas de la degradación ambiental ni el consumismo depredador. Dado que brinda tan sólo un pago por un periodo de tiempo determinado, no ofrece una solución a aspectos tales como la reducción de la pobreza.

Además, este mecanismo no ha impedido que los bosques se encuentren amenazados por actividades tales como el turismo a gran escala o el monocultivo de piña y palma africana, así como ha favorecido que grandes compañías produzcan madera bajo un concepto mercantilista concentrando incentivos - como el PSA - para el establecimiento de plantaciones de monocultivos y abriendo la explotación de madera del bosque y otros agroecosistemas según estrictos criterios de rentabilidad y mercado.

En el caso particular de los territorios indígenas, el PSA negocia los contratos con las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) adscritas al Consejo Nacional Indígena (Conai), que es una institución de carácter oficial encargada de manejar tanto los asuntos indígenas como su relación con las instituciones públicas. El gobierno

muestra como un logro del PSA la distribución de poco más de nueve millones de dólares entre todos los territorios indígenas del país. A pesar de que hay casos exitosos donde se ha hecho un uso planificado de estos recursos y/o se han repartido de manera equitativa, en muchos territorios estos dineros han generado tensiones ya que algunos grupos se han apropiado y administrado de manera subjetiva estos fondos, favoreciendo a las familias más cercanas a su entorno. En territorios de la etnia Ngöbe por ejemplo, se ha distribuido varios millones de dólares en PSA durante los últimos cinco años. Sin embargo hasta el momento no se conoce ningún caso donde el uso de estos fondos haya servido para consolidar sus territorios, dado que gran cantidad de tierra todavía está en manos de personas no indígenas. Lo anterior es de fundamental importancia pues hay territorios Ngöbe donde más del sesenta por ciento de la tierra está en manos de ganaderos no indígenas que provocan deforestación.

Como se mencionó anteriormente, el PSA es un antecedente de REDD en el país, y según la estrategia que el gobierno de Costa Rica está implementando y que se publicó a finales del 2010, uno de los principales actores durante este proceso son los territorios indígenas, principalmente porque allí se conserva una parte importante de los bosques del país. Con la implementación de REDD, el gobierno pretende consolidar al menos 600 mil hectáreas que están bajo el sistema actual PSA, y agregar 750 mil hectáreas adicionales, además de recuperar la cobertura forestal en el 12% del territorio nacional que se encuentra en usos distintos a su vocación forestal. También se propone mantener el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Cualquier política y mecanismo relacionado con los pueblos indígenas en el país debe pasar por un proceso de consulta, con el fin de favorecer su autonomía. Es así como FONAFIFO ha contactado a un grupo de indígenas de diversos territorios para que participen en el proceso oficial. En el grupo está la Red indígena Bribri y Cabecar (RIBCA), conformada por representantes de 8 territorios indígenas de la zona Atlántica de Costa Rica. Este grupo ha participado en la elaboración de un plan nacional de consulta para el tema REDD+ entre los Pueblos indígenas, con apoyo económico de la GIZ (Agencia de Cooperación Alemana). El Plan de Consulta, según RIBCA, fue elaborado con representantes de los 4 bloques regionales donde se agrupan los 24 territorios indígenas de Costa Rica. La propuesta del plan fue presentada en una reunión el pasado mes de enero a representantes de indígenas, quienes aprobaron el marco general del mismo. En dicho plan se establece, entre otras cosas, el sistema organizativo y de interlocución sobre REDD+ con los Pueblos indígenas, el cual es de conocimiento de FONAFIFO y GIZ, pero no de las comunidades.

Es así como el pasado mes de setiembre, representantes de Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADIs) y organizaciones indígenas comunitarias, regionales y nacionales, dieron a conocer a la Coordinadora de este tema en FONAFIFO, así como a funcionarios del Banco Mundial encargados del tema, una serie de anomalías y potenciales perjuicios que la iniciativa REDD+ acarrearía a los Pueblos Indígenas.

Según el Boletín de la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica, en dicha reunión se propuso que antes de implementar una estrategia REDD en el país es necesario superar algunos temas como: 1) La aprobación del Proyecto de Ley 14.352 de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas; 2) La seguridad territorial:

recuperación de la tierra, territorio y recursos naturales y de la biodiversidad; 3) Consensuar un plan nacional de desarrollo para Pueblos Indígenas; y 4) Consensuar políticas públicas y programas específicos para Pueblos Indígenas. Además se recalcó que a efectos de la consulta de REDD+ ya existen mecanismos para su realización, que han sido reconocidos, aceptados y aplicados por el propio estado y son los que se aplicaron en la elaboración del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas. Asimismo enfatizaron que una iniciativa como REDD+ no puede ser únicamente la decisión de un grupo de las llamadas ADIs.

De igual manera, se afirma que el gobierno intenta imponer su agenda política aún cuando los indígenas tienen la suya propia y que el estado costarricense nunca se ha preocupado por la recuperación de tierras indígenas, a pesar que existe la Ley Indígena desde 1977. Según Pablo Nájera, indígena de Terraba, “en REDD+ sencillamente tratan de mal utilizar a los indígenas, para avalar el proceso. Los indígenas en las comunidades no saben nada sobre REDD+ ¿Qué tanto fue la participación indígena en la definición de la estrategia? ¿Qué procesos se deben iniciar y por qué ahora? ¿Será REDD+ parte de la política indígena? ¿A quién se le va a vender? ¿Quién financia? ¿Por qué?” Igualmente Antonio Nájera, del mismo territorio, denuncia que su familia tiene 30 años de conservar una finca que dedican a fines educativos y a la investigación científica, que nunca han recibido un apoyo de FONAFIFO, y que es recién ahora se está enterando de lo que quieren hacer con REDD+, lo que indica que a las comunidades no se les ha brindado ni la más mínima información previa.

Si bien es cierto que en Costa Rica todavía no existe un acuerdo sobre REDD, ya el pueblo bribri —situado en el atlántico sur— sufre sus impactos. Miembros de la comunidad de Alto Durigna dentro del territorio Bribri han denunciado la implementación en sus territorios de REDD. Esta comunidad indígena está alarmada por la intención de FONAFIFO de aplicar ese mecanismo en unas mil hectáreas de bosques dentro de su territorio, que además rodea dos sitios considerados sagrados por la cultura bribri. Filidencio Cubillo, indígena bribri, ha manifestado: “los bosques de estas partes, no solamente son simples bosques sino son sitios sagrados para nuestro pueblo. Uno de ellos, el Surayo, es el origen de la creación, de la semilla. Fueron designados por el mismo Sibú para darle vida a su semilla. Lo mismo es el cerro Namasol. Es por esta razón que el mundo de afuera no entiende nuestra manera de ver, de sentir y de expresar nuestra espiritualidad. El mundo de afuera todo lo ve sólo por la plata, todo es mercancía para ellos. Así expresamos nuestro rechazo a este proyecto que pretende conservar, entre comillas, parte de estos bosques. Dicen que son mil hectáreas pero no sabemos cuánto será. Defenderemos estos bosques. Es la misma comunidad la que se manifiesta y no es gente de fuera que viene a calentarnos la cabeza”

Si en realidad se quisiera favorecer a las comunidades locales y a los pueblos indígenas, la solución debería ser la promulgación de políticas públicas integrales que favorezcan el control comunitario del territorio y los bienes de la Naturaleza, fortaleciendo iniciativas ya existentes, como la gobernanza comunitaria del bosque y la biodiversidad, garantizando las condiciones necesarias para que exista un ejercicio real de sus derechos históricos y colectivos como la autonomía y el control de sus tierras y territorios bajo su cosmovisión.

- Territorio en disputa: nuevo video sobre la economía verde vs las economías comunitarias del sur de Brasil

En el Estado brasileño de Pará aún sobrevive una vasta extensión de la Mata Atlántica, que hace 500 años cubría toda la costa del país y ahora está en grave peligro. Comunidades tradicionales Caiçaras, Quilombolas y Guaranís habitan en esa zona, y sus estilos de vida están estrechamente ligados a la Mata Atlántica.

Hace cincuenta años, comenzaron a llegar a la zona hacendados que eliminaron el bosque y se apoderaron de la tierra para criar búfalos.

En los años 1990 llegaron proyectos que forman parte de la llamada Economía Verde. La Fundación Boticário, dirigida por la mayor compañía de cosméticos de Brasil, el Grupo Boticário, compró un área de bosque para crear la “Reserva Natural de Salto Morato”, que se extiende sobre más de 2.000 hectáreas.

Luego vino la Sociedad de Investigación en Vida Salvaje y Educación Ambiental (SPVS), junto con The Nature Conservancy, una gran ONG estadounidense. La SPVS compró más de 18.000 hectáreas de bosque y las transformó en reservas naturales con el fin de almacenar carbono. Para ello, recibió 18 millones de dólares de Chevron, General Motors y American Electric Power, tres corporaciones estadounidenses que contaminan el ambiente y afirman que, almacenando carbono en el bosque, compensan la contaminación que causan.

Dichos proyectos han tenido un fuerte impacto sobre la vida de las comunidades tradicionales, la mayor parte de las cuales no poseen título legal sobre las tierras que ocupan o los bosques que usan. Ahora ya no son libres de trabajar la tierra como solían hacerlo, ya no pueden plantar, ya no pueden criar animales.

Hace treinta o cuarenta años, la población de Guaraqueçaba era el doble o más de lo que es ahora, porque todo el mundo trabajaba, había muchas familias que podían trabajar libremente y alimentarse a sí mismas. Pero ahora que todo está prohibido, la mayoría de las personas se fueron a la ciudad, lejos.

Eso dijo la población del lugar al equipo del WRM que visitó este año a las comunidades Caiçaras, Quilombolas y Guaranís para saber qué pensaban de ese tipo de proyectos de la Economía Verde, y qué sucede cuando las comunidades se organizan y recuperan el control de su tierra, como sucedió en la comunidad de Río Pequeno. Allí, con la ayuda del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), la población ocupó una zona que un hacendado planeaba vender a la SPVS. Las familias se organizaron, instalaron un campamento y comenzaron a construir un nuevo mañana para sus hijos.

Sus testimonios forman parte de un documental que muestra que los verdaderos protectores del bosque han sido pueblos como los Caiçaras, los Quilombolas y los

Guaraníes. Como ellos dicen, “no fueron los supuestos ecologistas los que lo preservaron. No, fuimos nosotros los que cuidamos de él en el pasado y seguiremos haciéndolo hoy. Nunca destruimos nada, nunca dañamos el ambiente. Al contrario, siempre vivimos aquí, y toda esta belleza fue preservada por nosotros, no por gente de afuera”.

El video “Territorio en disputa. La economía verde vs la economía de las comunidades. Una historia de los pueblos de la mata atlántica del sur de Brasil” está disponible en inglés, portugués y francés, y en breve en castellano, en la página del WRM.

[inicio](#)

PUEBLOS EN MOVIMIENTO

- Brasil: El pueblo indígena Mundukuru cancela un proyecto REDD

La comunidad indígena Mundukuru del Estado de Pará, en la Amazonía brasileña, decidió cancelar un contrato que habría permitido a la compañía irlandesa “Celestial Green Ventures” vender créditos de carbono provenientes de los bosques de su territorio. El acuerdo había sido firmado a principios de este año, y otorgaba a dicha compañía derechos sobre el carbono de los bosques pertenecientes al territorio indígena.

“Vamos a cancelar el acuerdo. Muchos miembros de la tribu no lo querían, así que, para evitar problemas, decidimos ponerle fin”, dijo Cándido Waru, líder de una asociación local del pueblo Mundukuru.

El acuerdo estaba siendo investigado por el Ministerio Fiscal federal de Brasil, el cual calcula que ya han sido firmados en el país unos 30 acuerdos de este tipo.

<http://www.pointcarbon.com/news/1.2049556>

[inicio](#)

- La Vía Campesina: la agroecología es la piedra angular de la soberanía alimentaria

La Vía Campesina Internacional se reunió en Surin, Tailandia, para celebrar el Primer Encuentro Global sobre Agroecología y Semillas, con el objetivo de compartir experiencias y construir una estrategia y una visión de la agroecología y las semillas.

En Tailandia hay cada vez más pequeños agricultores que están abandonando el modelo de agricultura industrial basado en la revolución verde y adoptando la agricultura ecológica. Según La Vía Campesina, ésta es el pilar fundamental de la soberanía alimentaria.

“No podremos alcanzar la soberanía alimentaria si la agricultura depende de insumos controlados por las corporaciones, si los impactos de la tecnología destruyen la

Madre Tierra, si no luchamos contra la mercantilización y la especulación de los alimentos y de la tierra, y si no conseguimos un mejor nivel de vida para quienes proveen alimentos saludables y accesibles a la comunidad”, dice la Declaración de Surin.

La agroecología es un instrumento para luchar contra las transnacionales agro-industriales y el modelo agro-exportador predominante; es una parte fundamental de la construcción de la justicia social en un nuevo sistema social igualitario, libre de la dominación del capital.

La Vía Campesina afirma que “la agricultura ecológica va a alimentar al mundo. Es hora de producir”.

El texto completo de la Declaración de Surin figura en:

<http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/agricultura-campesina-sostenible-mainmenu-42/1523-declaracion-de-surin-primer-encuentro-global-de-la-via-campesina-sobre-agroecologia-y-semillas-campesinas>

[inicio](#)

- Advertencia a instituciones financieras: No financien la destrucción de los bosques que realizan APP y otros fabricantes indonesios de celulosa y papel

Varios bancos e instituciones financieras de todo el mundo recibieron la advertencia, el 6 de noviembre último, de no invertir en fábricas de celulosa y papel asociadas a la deforestación y a violaciones de los derechos humanos en Indonesia.

Sesenta organizaciones no gubernamentales, ambientalistas y sociales, entre las que figuran una docena de agrupaciones de la sociedad civil indonesia, enviaron cartas pidiendo que se les asegurara que las instituciones financieras no invertirán en el aumento de la capacidad de producción de celulosa de Asia Pulp and Paper (APP) ni de otras compañías asociadas al Grupo Sinar Mas, en tanto no hayan realizado reformas.

Tres representantes de las ONG sociales y ambientales de Indonesia que firman la carta se reunirán con inversores, gobiernos, ONGs y medios de prensa de ocho países europeos, y presentarán información sobre los impactos sociales y ambientales de APP y otros productores indonesios de celulosa y papel.

La carta abierta está publicada en el sitio web de la European Environmental Paper Network (EEPN): http://www.environmentalpaper.eu/wp-content/uploads/2012/11/Bank_letter_on_pulp_investment.pdf

[inicio](#)

- Brasil: Indígenas bloquean ferrovía de VALE

El movimiento indígena Pindaré Caru, formado por los pueblos Guajajara y Awá, bloqueó, el pasado 3 de octubre, la ferrovía que pertenece a la multinacional minera

VALE, en la localidad de Alto Alegre do Pindaré en el estado de Maranhão.

Los indígenas protestaban contra la flexibilización de la legislación brasileña sobre sus derechos (medidas como la PEC 215 y la resolución 303/2012 de la Abogacía General del Estado). El objetivo de esa flexibilización es facilitarles la apropiación de los territorios indígenas a empresas multinacionales - como VALE - para que obtengan aún más beneficios de la explotación de esas riquezas.

La empresa VALE, la segunda mayor minera del mundo que está presente en más de 30 países, recibió a comienzos del año el “título de “public eye award” de peor empresa del mundo. Aún así, pretende perfilarse, de forma insistente, como una empresa social y ambientalmente responsable.

Actualmente, VALE promueve el monocultivo de palma aceitera en la Amazonia, causando más impactos sobre las poblaciones (ver www.wrm.org.uy/boletim/182/opiniao.html). También integró en 2011 el grupo de empresas encargado de la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte, que destruirá por lo menos 50 mil hectáreas de selva amazónica, además de causar otros numerosos impactos negativos sobre los pueblos de la Amazonia.
<http://www.brasildefato.com.br/node/10827>

[inicio](#)

RECOMENDADOS

- **Video: “Exposing REDD. The False Climate Solution.”** (REDD desenmascarado. La falsa solución climática) La fuente de noticias Mending News recibe al director ejecutivo de IEN (Red Ambiental Indígena), Tom Goldtooth, para obtener la verdadera historia de REDD, la “solución” climática engañosa propuesta por la ONU. Reducir las emisiones provenientes de la deforestación y la degradación de los bosques en los países del sur refuerza la colonización global de la madre tierra y le roba su porvenir.
<http://www.youtube.com/watch?v=7OzB-WBuwgk>

[inicio](#)

- **Nuevo boletín: REDD y los servicios ambientales amenazan la vida de los pueblos del bosque de Acre, Brasil.** Un boletín conjunto del Sindicato de Trabajadores de Xapuri y de la federación indígena FEPHAC explica los verdaderos problemas de los habitantes del bosque de Acre y por qué REDD y los servicios ambientales no son la solución; por el contrario. El boletín enumera una serie de preocupaciones que plantean dichos mecanismos. Ver en inglés en http://www.wrm.org.uy/subjects/REDD/REDD_Acre.pdf

[inicio](#)

- **Informe: “Recognising Sacred Natural Sites and Territories in Kenya: An Analysis of how the Kenyan Constitution, National and International Laws can Support the**

Recognition of Sacred Natural Sites and their Community Governance Systems”,
(Reconocimiento de los sitios y territorios naturales sagrados de Kenya: análisis de la forma como la Constitución de Kenya y las leyes nacionales e internacionales pueden contribuir al reconocimiento de los sitios naturales sagrados y de sus sistemas de gobierno comunitarios), por Adam Hussein Adam. Publicado por: Instituto para la Cultura y la Ecología (Kenya), Red Africana de la Biodiversidad y Fundación Gaia.

[inicio](#)

- Video: Líderes indígenas Sarayaku llaman a la acción contra la extracción de petróleo en la selva amazónica del sur de Ecuador.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=58cC0RppBe0

[inicio](#)
